



GACETA DE PUERTO RICO

AÑO 1866.

MARTES 11 DE DICIEMBRE.

NUM. 148.

PARTE OFICIAL

GOBIERNO SUPERIOR CIVIL

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Direccion de Administracion.

Habiendo resultado vacante la Alcaldia del pueblo de Bayamon por separacion voluntaria del que la ocupaba, nombro para que la sirva en propiedad a D. José Muñoz, Alcalde del Pepino por convenio así al mejor servicio público.

Vacante la Alcaldia de 1.ª clase del pueblo del Pepino por traslacion del que la ocupaba y correspondiendo su provision al turno de antigüedad, nombro para que la sirva en propiedad a don Luis Chieza que es el primero de los de su clase para el ascenso.

Vacante la Alcaldia de Santa Isabel, por ascenso del que la desempeñaba, nombro para que la sirva en propiedad a D. Juan de la Cruz Cordero, atendiendo a los servicios que ha prestado en la carrera Civil.

Y por último, vacante la Secretaria de la Alcaldia del pueblo de Toa-alta por separacion voluntaria del que la ocupaba, nombro para que la sirva en propiedad a D. Zoilo M. Abril, teniendo en consideracion los servicios que ha prestado y demas circunstancias que en él concurren.

Puerto-Rico 7 de Diciembre de 1866.—MAR-CHESI.

DIRECCION DE ADMINISTRACION LOCAL

DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Por el Ministerio de Ultramar se dice de Real orden al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla, con fecha 4 del mes anterior lo que sigue:

Excmo. Sr.—Con esta fecha digo al Regente de esa Real Audiencia lo que sigue:—“La Reina [q. D. g.] se ha dignado expedir el Real Decreto siguiente:—Para la Presidencia de la Sala segunda de la Audiencia de Puerto-Rico, vacante por promocion de D. José Lopez Vera, vengo en nombrar a D. Martin Alvarez de Zarate, Magistrado de la misma Audiencia. Dado en Palacio a tres de Noviembre de mil ochocientos sesenta y seis.—Rubricado de la Real mano.—El Ministro de Ultramar, Alejandro Castro.—Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—De la propia orden lo traslado a V. E. para iguales fines.

Y en cumplimiento de lo resuelto por S. E. en acuerdo con esta Direccion se publica por medio de este periódico en observancia de lo que acerca del particular está prevenido. Puerto-Rico 4 de Diciembre de 1866.—Carlos de Rojas.

Por el Ministerio de Ultramar se ha comunicado al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla con fecha 4 del mes anterior la Real orden siguiente.

Excmo. Sr.—Con esta fecha digo al Regente de la Real Audiencia de esa Isla lo que sigue:—“La Reina [q. D. g.] se ha dignado expedir el Real Decreto siguiente.—Para la Plaza de Magistrado de la Sala primera de la Real Audiencia de Puerto-Rico, vacante por promocion de D. Martin Alvarez de Zarate, vengo en nombrar a don Manuel Pineda y Apestegui, Marques de Campo-Santo Magistrado electo de Manila.—Dado en Palacio a tres de Noviembre de mil ochocientos sesenta y seis.—Rubricado de la Real mano.—El Ministro de Ultramar, Alejandro Castro.—Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—De la propia orden lo traslado a V. E. para iguales fines.

Y en cumplimiento de lo resuelto por S. E. en acuerdo con esta Direccion se publica por medio de este periódico en observancia de lo que acerca del particular está prevenido. Puerto-Rico 4 de Diciembre de 1866.—Carlos de Rojas.

En vista de acta celebrada por el Municipio y

mayores contribuyentes de Hato-grande relativa entre otros particulares a la manifestacion hecha por el Dr. D. Manuel Soto España, prestándose a facilitar gratuitamente sus servicios médicos a los vecinos pobres de dicho pueblo en el caso de que apareciera en el mismo la epidemia del Cólera morbo, ha resuelto el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil en acuerdo con esta Direccion, dar las gracias al expresado Profesor por este acto de abnegacion, generosidad y patriotismo, tan digno de ser imitado en las actuales circunstancias, disponiendo ademas se haga notorio para conocimiento general.

Y en cumplimiento de lo mandado por S. E. se publica en la Gaceta Oficial para los efectos prevenidos. Puerto-Rico 7 de Diciembre de 1866.—Carlos de Rojas.

Con la Real orden a 29 de Octubre último se han recibido en este Gobierno dos ejemplares del convenio de extradicion de malhechores entre España y los Países Bajos y otros dos de igual clase con Sajonia.

Y los contratos de que se hace referencia son los siguientes.

Convenio para la reciproca extradicion de malhechores entre España y los Países Bajos, firmado en el Haya el 5 de Noviembre de 1860.

S. M. la Reina de las Españas y S. M. el Rey de los Países-Bajos, habiendo resuelto de comun acuerdo celebrar un Convenio para la reciproca extradicion de malhechores a fin de asegurar la represion de los crímenes y delitos comunes cometidos en sus respectivos territorios y cuyos autores ó cómplices quisieran sustraerse a la vindicta pública y a la accion de las leyes, refugiándose de uno de los dos países en el otro, han revestido al efecto de sus plenos poderes a saber: Su Majestad la Reina de España a don Rafael Jabat, Caballero de la orden de Santiago y de San Juan de Jerusalem, Comendador de la orden de Carlos III y del Leon Neerlandés, etc. etc., su Ministro Residente en la corte de S. M. el Rey de los Países Bajos;

Y S. M. el Rey de los Países-Bajos al Sr. Julio Felipe Jacobo Adrian, Conde de Zuylen de Nyevelt, Caballero de la Orden del Leon Neerlandés, Gran Cruz de la orden del Salvador, Caballero de primera clase de la Orden de Medjidí, Comendador de la Orden de Leopoldo, su Gentil-hombre y Ministro de Negocios extranjeros;

Los cuales, despues de haberse comunicado sus plenos poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1.º—Los Gobiernos de España y de los Países-Bajos se obligan por el presente Convenio a entregarse recíprocamente, con excepcion de sus nacionales, todos los individuos condenados, acusados ó contra los cuales se hubiere dictado auto motivado de prision por las Autoridades competentes de aquel de los dos países, contra las leyes del cual se hubieren cometido uno ó varios de los crímenes ó delitos mencionados en el artículo siguiente:

La demanda de extradicion no podrá hacerse mas que por la via diplomática.

Se comprender en el reino de los Países-Bajos, en cuanto a la aplicacion de este Convenio, bajo la denominacion de nacionales los extranjeros que segun las leyes del reino son asimilados a los nacionales, así como los extranjeros que se han establecido en el país y despues de haberse casado con una mujer del mismo, tienen uno ó varios hijos de este matrimonio nacidos en dicho país.

El mismo privilegio se concederá a España en los casos en que los reclame, justifican-

do que los acusados reúnen las condiciones enunciadas en este párrafo.

Ar. 2.º Los crímenes y delitos por los cuales podrá concederse recíprocamente la extradicion, son:

1.º Parricidio, asesinato, envenenamiento, infanticidio, homicidio voluntario, violacion ó estupro.

2.º Incendio.

3.º Falsedad cometida en instrumentos públicos ó de comercio y en escrituras privadas, comprendiendo en esto la imitacion ó falsificacion de billetes de Banco, de papel moneda y de efectos públicos.

4.º Fabricacion de moneda falsa, alteracion de la moneda y emision hecha a sabiendas de moneda falsa.

5.º Falso testimonio.

6.º Robo, cuando ha sido acompañado de circunstancias agravantes; estafa, concusion, soborno de funcionarios públicos, sus traccion ó malversacion cometidas por Depositarios ó otros empleados públicos que manejen fondos.

7.º Quebrantas fraudulentas.

Ar. 3.º Los crímenes ó delitos políticos no pueden ser objeto de la extradicion estipulada por el presente Convenio.

El individuo cuya extradicion hubiere sido concedida no podrá en ningun caso ser perseguido ó castigado por crímenes ó delitos políticos anteriores, ni por ningun hecho que tenga relacion con semejante crimen ó delito, ni tampoco por crímenes ó delitos comunes no comprendidos en el artículo segundo.

Ar. 4.º Los objetos que se hallaren en poder del individuo reclamado, ó que se pudieren robar si el encausado los hubiere depositado en el país en que se ha refugiado así como todos los demas objetos que puedan servir para la comprobacion del delito, serán entregados al Gobierno reclamante al tiempo de efectuarse la extradicion ó despues si há lugar a ello, siempre que la Autoridad competente del Estado requerido hubiere ordenado la entrega.

Ar. 5.º—La demanda de extradicion no será concedida sino en vista de la presentacion del original ó del testimonio ó certificacion de la sentencia ó del auto definitivo de condena, ó de la acusacion fiscal en que se pide una pena aflictiva (ou de mise en accusation) ó del auto motivado de prision (ou de l'ordonnance de poursuite avec mandat d'arrêt,) ó de cualquier otro documento de igual valor expedito con arreglo a la legislacion del país que hace la demanda y declarando el crimen ó delito y la disposicion penal que le es aplicable. La demanda de extradicion irá ademas acompañada, á ser posible, de las señas del individuo reclamado.

Ar. 6.º—Si el individuo reclamado no fuese súbdito del Estado reclamante; sino de un tercer Estado, la extradicion podrá suspenderse hasta que el Gobierno de que dependa dicho individuo haya sido puesto en el caso de hacer saber las razones que pueda tener para oponerse a la extradicion.

Sin embargo el Gobierno a quien se dirija la reclamacion quedará libre de negar la extradicion ó de entregar el individuo reclamado, ya sea al Gobierno de su propio país, ya al del país en que haya cometido el crimen ó delito.

Ar. 7.º—Cuando el individuo reclamado se halle encausado ó condenado por los Tribunales del país en que se ha refugiado por crímenes ó delitos cometidos en este país la extradicion será diferida hasta que haya sido declarado libre ó absuelto ó haya cumplido su condena.

Ar. 8.º—La extradicion no podrá concederse si hubiere trascurrido el término de

la prescripcion de la pena ó de la accion criminal con arreglo a las leyes del país donde el individuo reclamado se hubiere refugiado.

Ar. 9.º—No habrá lugar a la extradicion cuando la demanda fuere motivada por el mismo crimen ó delito por el cual el individuo reclamado sufra ó haya sufrido ya su pena, ó del que ha quedado libre ó absuelto en el país a quien se pidiere la extradicion.

Si el individuo se halla detenido por deudas en virtud de una condena anterior a la demanda de extradicion, esta se diferirá hasta que sea puesto en libertad.

Ar. 10.—Los individuos cuya extradicion hubiere sido concedida serán conducidos al puerto que designe el Agente diplomático que ha hecho la reclamacion.

Los gastos ocasionados por el arresto, la detencion, la manutencion y el transporte de los individuos cuya extradicion hubiere sido concedida hasta el momento de su entrega, serán de cuenta del Gobierno en cuyo territorio se hubieren refugiado.

Por el contrario, desde el momento en que hubieren sido embarcados, los gastos de transporte y de manutencion serán de cuenta del Gobierno reclamante.

Ar. 11.—Cuando en la instruccion de una causa criminal uno de los dos Gobiernos juzgase necesario el examen de testigos domiciliados en el otro Estado; se remitirá un exhorto al efecto por la via diplomática, al que se dará curso, observando las leyes del país en que los testigos fuesen invitados a comparecer.

Los Gobiernos respectivos renuncian por una y otra parte a cualquiera reclamacion que tenga por objeto la restitution de los gastos que resulten de ellos.

Todo exhorto que tenga por objeto pedir el examen de testigos deberá ir acompañado de una traduccion francesa.

Ar. 12.—Si en una causa criminal es necesaria la comparecencia personal de un testigo en el otro país, su Gobierno lo exhortará a acceder a la invitacion que se le haga; y si consintiese, se le abonarán los gastos de viaje y de estancia segun las tarifas y reglamentos vigentes en el país en que haya de tener lugar la comparecencia.

Ar. 13.—Cuando en una causa criminal se juzgase útil ó necesario el cargo de reos detenidos en el otro Estado ó bien la comunicacion de pruebas instrumentales ó de documentos que se hallasen en poder de las autoridades del otro país, se hará la reclamacion por la via diplomática, y se le dará curso, en tanto que no haya consideraciones especiales que se opongan a ella, con obligacion de restituir los reos y las pruebas.

Los Gobiernos respectivos renuncian por ambas partes a cualquiera reclamacion de gastos que resultaren del transporte, y de la restitution, dentro de los límites de sus respectivos territorios, de los reos que han de ser careados, así como del envío y devolución de las pruebas y documentos.

Ar. 14.—Las Altas Partes contratantes han declarado al mismo tiempo que el empleo de la lengua francesa de que se han servido de comun acuerdo en el presente Convenio no puede ni debe en caso alguno perjudicar el derecho que respectivamente tienen de servirse de su propio idioma en el texto de las estipulaciones internacionales.

Ar. 15.—El presente Convenio no empezará a regir sino 20 dias despues de su publicacion en la forma prevista por las leyes de los dos países.

Continuará en vigor hasta seis meses despues de declaracion contraria por parte de uno de los dos Gobiernos.